

la medida en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realización de las operaciones sujetas y no exentas al Impuesto o en las demás operaciones determinadas en el artículo 61, número 3, del Reglamento del Impuesto;

Considerando que, según establece el artículo 152, número 2, del Reglamento, los comerciantes minoristas sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia que realicen otras actividades en sectores diferenciados de actividad, deberán llevar el libro registro de facturas recibidas, anotando con la debida separación las facturas correspondientes a cada sector de actividad diferenciado, incluso las correspondientes a este régimen especial;

Considerando que el título VI del Reglamento del Impuesto y el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, regulan las obligaciones formales y registrales que atañen a los sujetos pasivos del Impuesto entre las que se encuentran:

- a) Expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos correspondientes a sus operaciones y conservar copia de los mismos.
- b) Conservar las facturas y documentos sustitutivos recibidos de sus proveedores.
- c) Llevar, en debida forma, el libro registro de facturas emitidas, el libro registro de facturas recibidas y el libro registro de bienes de inversión, este último, cuando deba practicarse la regularización de deducciones por bienes de inversión;

Considerando que el Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por el Gremio de Comerciantes de Ferrería de Cataluña:

Primero.-En ningún caso será de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia en relación con la maquinaria de uso industrial.

Se considerará maquinaria de uso industrial a efectos de la exclusión de la aplicación del régimen especial del recargo de equivalencia, la maquinaria que, objetivamente considerada, tenga ordinaria aplicación industrial, con independencia de que el fabricante o proveedor del comerciante minorista repercuta o no el recargo de equivalencia.

Segundo.-Si un comerciante minorista sometido al régimen especial del recargo de equivalencia realiza actividades de comercio de bienes excluidos de la aplicación de dicho régimen especial, la actividad de comercio minorista sometida a dicho régimen especial tendrá en todo caso la consideración de sector diferenciado de la actividad económica del sujeto pasivo a efectos del régimen de deducciones, obligaciones formales, registrales y contables y demás peculiaridades establecidas en relación a este régimen, cualesquiera que sean los porcentajes de deducción aplicables en los demás sectores.

Tercero.-La determinación de la deuda tributaria correspondiente a los sectores de actividad no sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia deberá efectuarse con arreglo a las normas reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido de general aplicación.

Las obligaciones formales exigibles en relación a dichos sectores de actividad son las establecidas en el título VI del Reglamento del Impuesto citado y en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.

Madrid, 21 de mayo de 1986.-El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

14132 RESOLUCION de 21 de mayo de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 5 de marzo de 1986, por el que el ilustre Colegio de Economistas de Murcia formula consulta vinculante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Visto el escrito de fecha 5 de marzo de 1986, por el que el ilustre Colegio de Economistas de Murcia formula consulta vinculante respecto a la interpretación de la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la Entidad consultante es un Colegio Profesional;

Resultando que se consulta sobre la identificación del destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en las facturas cuando el importe de la contraprestación de las operaciones consignadas en las mismas supere las 10.000 pesetas;

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo tercero, número 1,b), del Real Decreto 2402/1985, de 18 de

diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios o profesionales, toda factura y sus copias y matrices contendrán, entre otros datos y requisitos, el nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor y del destinatario o, en su caso, localización del establecimiento permanente si se trata de no residentes.

Cuando el destinatario sea una persona física que no desarrolle actividades empresariales o profesionales bastará que, respecto de ella, consten su nombre y apellidos y número de documento nacional de identidad;

Considerando que, en aplicación de lo dispuesto en el número 1 del artículo 4.º del citado Real Decreto, tratándose de operaciones realizadas para quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando en su condición de tales, no será obligatoria la consignación en la factura de los datos de identificación del destinatario si se trata de operaciones cuya contraprestación no sea superior a 10.000 pesetas, y, en cualquier caso, en las operaciones relacionadas en dicho artículo 4.º, número 1;

Considerando que, a diferencia del número 1 del artículo 4.º mencionado en el considerando anterior, el número 3 del mismo artículo 4.º establece una excepción a la obligación general de emitir facturas, permitiendo sustituir éstas por talonarios de vales numerados o de «tickets» expedidos por máquinas registradoras, en las operaciones y con los requisitos que se consignan en dicho número 3.

Esta Dirección General considera ajustada a Derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por el Ilustre Colegio de Economistas de Murcia:

Toda factura y sus copias o matrices contendrán, entre otros datos o requisitos exigidos por el artículo 3.º del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, el nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del destinatario.

Cuando el destinatario sea una persona física que no desarrolle actividades empresariales o profesionales bastará que, respecto de ella, consten su nombre y apellidos y su número de documento nacional de identidad.

No obstante, no será obligatoria la consignación en la factura de los datos de identificación del destinatario cuando se trate de operaciones relacionadas con el número 1 del artículo 4.º del citado Real Decreto 2402/1985, y de aquellas cuya contraprestación no sea superior a 10.000 pesetas, siempre que se realicen para quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

Madrid, 21 de mayo de 1986.-El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

14133 RESOLUCION de 21 de mayo de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 18 de enero de 1986, por el que la Asociación Comarcal de Empresarios de Comercio y Actividades Afines de Miranda de Ebro formula consulta vinculante sobre la interpretación de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo del artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986.

Visto el escrito de la Asociación Comarcal de Empresarios de Comercio y Actividades Afines de Miranda de Ebro, por el que se formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la Asociación consultante es una organización patronal;

Resultando que se formula consulta sobre la obligatoriedad de expedir factura completa en la que consten, entre otros, los datos de identificación del destinatario, el tipo tributario aplicado y la cuota repercutida, de forma separada de la base imponible por las operaciones de ventas al por menor, cuya contraprestación sea superior a 10.000 pesetas, cuando los destinatarios no tengan la condición de empresarios o profesionales;

Considerando que el artículo 1.º del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula la obligación de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios o profesionales dispone que los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar facturas por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero, número 1, del Real Decreto 2402/1985 citado, toda factura y sus copias matrices contendrán, entre otros datos y requisitos, los datos de identificación del destinatario, la descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor

Añadido, deberán consignarse en la factura todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible, así como el tipo tributario y la cuota repercutida;

Considerando que, no obstante, el artículo cuarto, número 1, del Real Decreto citado autoriza que, entre otras, en las operaciones de venta al por menor a que alude el número 1, letra d), del mismo artículo, no se consignen en las facturas los datos del destinatario cuando éste no tenga la condición de empresario o profesional actuando en su condición de tal;

Considerando que asimismo el artículo cuarto, número 2, de dicho Real Decreto autoriza que, en las operaciones de venta al por menor a que alude el número 1, letra d), del mismo artículo cuarto, se omita la consignación expresa en la factura de la cuota repercutida y del tipo impositivo aplicado, haciendo constar la expresión «IVA incluido» a continuación del precio;

Considerando que el número 1 del mismo artículo 4.º citado dispone, en su letra d), que son ventas al por menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes cuando el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional sino como consumidor final de aquéllos, no reputándose venta al por menor las que tengan por objeto bienes que por su naturaleza sean principalmente de utilización industrial;

Considerando que, en virtud de lo establecido en el artículo cuarto, número 3, del mismo Real Decreto, en las operaciones de venta al por menor y otras que se concretan en el citado precepto, las facturas podrán ser sustituidas por talonarios de vales numerados o, en su defecto, «tickets» expedidos por máquinas registradoras en los cuales se hará constar, al menos, los siguientes datos y requisitos:

- Número y, en su caso, serie.
- Número de identificación fiscal del expedidor.
- Tipo impositivo o la expresión «IVA incluido».
- Contraprestación total.

Considerando que el artículo cuarto, número 7, del mencionado Real Decreto dispone que los empresarios o profesionales están siempre obligados a expedir y entregar factura completa por las operaciones que realicen y a conservar copia o matriz de la misma, cuando el destinatario de la operación así lo exija por razón de poder practicar las correspondientes minoraciones o deducciones en la base o en la cuota de aquellos tributos de los que sea sujeto pasivo,

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por la Asociación Comarcal de Empresarios de Comercio y Actividades Afines de Miranda de Ebro:

Primero.—Los comerciantes minoristas están obligados a emitir y entregar facturas por las operaciones que realicen.

Dichas facturas contendrán, al menos, los datos y requisitos que se indican en el artículo 3.º del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre y, en especial, la identificación del destinatario, el tipo tributario aplicado y la cuota repercutida de forma distinta y separada de la base imponible.

Segundo.—Tratándose de ventas al por menor efectuadas por dichos comerciantes a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales, no será obligatoria la consignación en factura del destinatario, cualquiera que sea la cuantía de la contraprestación de dichas ventas. También podrá omitirse en dichas operaciones la consignación expresa en la factura del tipo impositivo aplicado y la cuota tributaria repercutida, haciendo constar la expresión «IVA incluido» a continuación del precio.

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, las facturas podrán ser sustituidas por talonarios de vales numerados o, en su defecto, «tickets» expedidos por máquinas registradoras, en los que no será exigible la consignación de la identificación del destinatario, ni de la cuota repercutida de forma distinta y separada de la contraprestación total. También podrá omitirse la consignación del tipo impositivo aplicado si, alternativamente, hiciesen constar la expresión «IVA incluido».

Tercero.—A efectos de la aplicación de las reglas indicadas en el punto segundo, se considerarán ventas al por menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes cuando el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional sino como consumidor final. No se reputarán ventas al por menor las que tengan por objeto bienes que, por su naturaleza, sean principalmente de utilización industrial.

Cuarto.—No obstante, los comerciantes minoristas están siempre obligados a expedir y entregar factura completa y a conservar copia o matriz de la misma cuando el destinatario de la operación así lo exija para poder practicar las correspondientes minoraciones o deducciones en la base o en la cuota de los tributos de los que sea sujeto pasivo.

Madrid, 21 de mayo de 1986.—El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

14134 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambios oficiales del día 2 de junio de 1986

Divisas convertibles	Cambios	
	Comprador	Vendedor
1 dólar USA	148,215	148,586
1 dólar canadiense	106,863	107,130
1 franco francés	19,967	20,017
1 libra esterlina	218,127	218,673
1 libra irlandesa	193,272	193,755
1 franco suizo	76,751	76,943
100 francos belgas	311,742	312,522
1 marco alemán	63,595	63,754
100 liras italianas	9,291	9,314
1 florin holandés	56,577	56,719
1 corona sueca	20,043	20,093
1 corona danesa	17,192	17,235
1 corona noruega	18,906	18,953
1 marco finlandés	27,704	27,773
100 chelines austriacos	905,071	907,337
100 escudos portugueses	95,009	95,247
100 yens japoneses	84,670	84,882
1 dólar australiano	104,862	105,124

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

14135 ORDEN de 6 de mayo de 1986 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 13/1985.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Quinta, con el número 13/1985, interpuesto por don Bartolomé Homar Solivellas y don Bernardino Homar Solivellas, contra la sentencia dictada con fecha 11 de diciembre de 1984 por la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, en el recurso número 227/1983, interpuesto por los recurrentes antes mencionados, contra el acuerdo de 4 de julio de 1983, sobre las obras de la «Nueva carretera; autopista PM-27, Central Mallorca. Tramo Palma-Santa María, se ha dictado sentencia con fecha 30 de octubre de 1985, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos la apelación formulada por los expropiados don Bartolomé y don Bernardino Homar Solivellas y el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, en 11 de diciembre de 1984, en los autos correspondientes al recurso 227 de 1983, la que confirmamos. Sin costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, en lo que a este Departamento afecta.

De esta resolución y de la sentencia debe darse traslado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a los efectos que pudieran proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la mencionada Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de mayo de 1986.—P. D. (Orden de 6 de junio de 1979), el Subsecretario, Baltasar Aymerich Corominas.

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras.